

I. El asesinato  
26 de abril de 1998

La tarde de un domingo, pocas horas antes de ser asesinado a golpes en el garaje de la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, monseñor Juan Gerardi Conedera bebía whisky y contaba chistes en una pequeña reunión celebrada en el jardín de la casa de un amigo. Los chistes de monseñor Gerardi eran famosos por divertidos y, algunas veces, atrevidos. Tenía fama de chistoso. «En una reunión con él, se escuchaba todo un repertorio de chistes», le diría a los policías, dos días después, el padre Mario Orantes Nájera, auxiliar de la parroquia. «Ojalá lo hubieran conocido.» Los guatemaltecos admiran a alguien que puede contar chistes. Un buen chiste es, entre otras cosas, una defensa contra el miedo, la soledad y la desesperación de no poder hablar. En las situaciones más tensas, incómodas o tenebrosas, un guatemalteco siempre sale adelante con un chiste o dos, contado con un aire casi serio, a menudo con un recitativo torrente de palabras, con menos énfasis en la voz, raras veces alzada, que en los gestos de las manos. Hasta cuando la risa es forzada parece un alivio.

Los guatemaltecos han sido siempre conocidos por su

reserva y secretismo e incluso su melancolía. «Hombres más remotos que las montañas» fue como Wallace Stevens los describió en un poema después de visitar la «Guatemala ajena, a quemarropa, verde y real». Dos culturas profundamente ceremoniosas y fantasmagóricas, la española-católica y la maya-pagana, dieron forma a la identidad nacional del país a lo largo de siglos de crueldad y aislamiento. (Los barcos del imperio español raramente anclaron en las costas guatemaltecas porque la tierra les ofrecía un botín poco atractivo, especialmente si se comparaba con el oro y la plata disponibles en México y Suramérica.) En 1885, el escritor y político exiliado Enrique Guzmán describió el país como un Estado corrupto y policial, lleno de tantos informantes del gobierno que «hasta los borrachos eran discretos» —una observación que nunca ha dejado de ser citada porque nunca, de un dictador o gobierno a otro, ha dejado de parecer cierta.

Monseñor Gerardi era un hombre grande y aún fuerte a pesar de sus setenta y cinco años. Medía cerca de un metro ochenta y pesaba alrededor de cien kilos. Era de pecho amplio y espalda ancha; nariz prominente y colorada; cabello crespo, grueso y canoso. Después del asesinato, sus amigos recordaban no sólo su sentido del humor y su afición por el alcohol, sino su voracidad para leer, su inteligencia realista y su casi clarividente entendimiento de la política guatemalteca, notoriamente enredada, corrupta y letal. Todo ello lo convirtió en el consejero más confiable de su superior, el arzobispo Próspero Penados del Barrio, una figura menos terrenal. Poco tiempo después de que Penados fue nombrado arzobispo, en 1983, hizo regresar a Gerardi del exilio político en Costa Rica. Como fundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, a la que usualmente llaman por su acrónimo

ODHA, Gerardi se convirtió en uno de los líderes y voces más importantes de la Iglesia católica.

La reunión en el jardín esa última tarde de la vida del obispo Gerardi celebraba la conclusión de *Guatemala: Nunca Más*, un informe de cuatro volúmenes, 1.400 páginas, sobre una investigación sin precedentes de las desapariciones, masacres, asesinatos, torturas y violencia sistemática que había padecido la población guatemalteca desde el comienzo de los años 60, décadas durante las cuales dictadores militares y gobiernos civiles de derecha bajo dominio militar emprendieron la guerra contra grupos guerrilleros de izquierda. Unos doscientos mil civiles fueron asesinados durante la guerra que había concluido formalmente en diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz supervisados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El ejército guatemalteco había vencido fácilmente en el campo de batalla, pero firmar la paz con la guerrilla se había convertido en una necesidad política y económica. Aun así, el ejército pudo dictar varios de los términos de los acuerdos y diseñar para sí mismo y para las organizaciones guerrilleras una amnistía que suprimió de raíz toda posibilidad de que alguien entablara juicios por crímenes relacionados con la guerra. Esta «piñata de autoperdón» fue el comienzo siniestro de una era supuestamente democrática basada en principios como el respeto por la ley, el acceso a la justicia y la desmilitarización.

Los Acuerdos de Paz promovieron la creación de una comisión de la verdad apoyada y financiada por la ONU —la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH— que pretendía establecer el historial de los crímenes cometidos durante los años de guerra. Pero muchos activistas de derechos humanos, incluido monseñor Gerardi, quien había participado en las negociaciones de paz, dudaban

que esa comisión pudiera proveer un informe completo de los hechos. La comisión no estaba autorizada a identificar con nombre y apellidos a violadores de derechos humanos y no podría responsabilizar a nadie por los crímenes. Los testimonios dados a la comisión tampoco podrían ser usados en futuros juicios. Como contrapartida, bajo la guía de Gerardi, la ODHA emprendió una investigación paralela de apoyo, el proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica, conocido como REMHI, la cual culminó con el informe *Guatemala: Nunca Más*. El obispo Gerardi escribió la introducción de ese informe.

El miércoles 22 de abril, monseñor Gerardi junto con Ronalth Ochaeta, un abogado de treinta y tres años, director ejecutivo de la ODHA, y Edgar Gutiérrez, de treinta y seis, coordinador de REMHI, ofreció una conferencia de prensa para informar a los reporteros sobre el contenido general de *Guatemala: Nunca Más*. Cuando un reportero preguntó si tomaban medidas de seguridad, Gerardi cedió el micrófono a Gutiérrez, al mismo tiempo que se volteó para murmurar al oído de Ochaeta: «Qué vaina.» Poco después del asesinato, Ochaeta vio en un periódico una fotografía que había captado justamente ese instante. El obispo, recostado en su silla, tenía una mirada de preocupación.

La siguiente noche, el jueves 23 de abril, monseñor Gerardi y su equipo habían invitado a periodistas y personajes influyentes a una cena en el Palacio Arzobispal, una extensión del complejo de la Catedral Metropolitana, cerca de la iglesia de San Sebastián. Esa noche se entregaron copias de los dos primeros volúmenes de *Guatemala: Nunca Más*—«El Impacto de la Violencia» y «Los Mecanismos del Horror»—. Mientras los invitados cenaban, el obispo Gerardi explicó la metodología del REMHI, y minutos después respondió preguntas de los asistentes. Durante un período

de dos años, explicó, alrededor de ochocientas personas se habían sometido a un entrenamiento intensivo para recopilar los testimonios de la investigación. Operando desde trece centros regionales, los «animadores a la reconciliación» habían recorrido y atravesado todo el país. La población de Guatemala es sesenta por ciento maya-indígena, y los mayas, los campesinos rurales especialmente, habían sido las víctimas más afectadas de la carnicería de esa guerra. Más de la mitad de las entrevistas de *Guatemala: Nunca Más* se habían realizado en quince idiomas mayas y el resto en español.

El viernes 24 de abril, *Guatemala: Nunca Más* fue formalmente presentado en la catedral. La grande y tenebrosa casa del Señor—un austero y firme edificio neoclásico de ciento cincuenta años cuyas paredes aún muestran las marcas provocadas por el terremoto de 1976—estaba abarrotada de diplomáticos, políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales, antiguos guerrilleros, periodistas, activistas de derechos humanos y otras personas. El único organismo no representado, a pesar de la invitación, fue el gobierno del presidente de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen.

Se colocaron dos pantallas de televisión en cada uno de los dos pasillos de la nave de la catedral para que la gente, sentada o de pie, pudiera ver la ceremonia que tenía lugar en el altar. A pesar de la gravedad del informe, había cierto júbilo silencioso. Para muchos, parecía como si Guatemala se encontrara realmente al borde de una nueva era. Hacía tan sólo doce días que el presidente Arzú había anunciado por la televisión nacional que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas había removido a Guatemala de la lista de los países violadores de los derechos humanos, un estatus que había mantenido durante diecinueve años, lo cual había llevado a la ONU a impo-

ner sanciones, molestas inspecciones, y suspensiones periódicas por parte del Congreso de Estados Unidos a la ayuda militar (aunque de manera encubierta o bien bajo otras formas de ayuda militar, a través de la CIA, otras naciones como Taiwán e Israel —este último, por ejemplo, construyó la fábrica de municiones del ejército de Guatemala—, el país había mantenido ese financiamiento).

Al lado de los Acuerdos de Paz, el fin de la posición de Guatemala como Estado paria abrió camino para la renovación de financiamientos y ayuda extranjera. Y ahora la Iglesia, a través del REMHI, iniciaba un informe confiable del pasado —un informe que, Gerardi había hecho énfasis en ello en repetidas ocasiones, era crucial para reparar el tejido social destruido del país y para garantizar que nunca más los abusos y violaciones de los derechos humanos serían protegidos por una cultura oficial de silencio y mentiras o por un sistema legal que, efectivamente, daba a ciertas instituciones y sectores de la sociedad carta blanca para cometer crímenes.

Esa noche en la catedral, obispos de todas las diócesis involucradas en el REMHI estaban reunidos en el altar (sólo una de las doce diócesis del país se había negado a participar). Un pastor luterano fue invitado a hablar durante la presentación. «Cuando emprendimos esta tarea, nos interesaba conocer, para compartirla, la verdad», dijo Gerardi en su discurso, «reconstruir la historia del dolor y la muerte, ver los móviles, entender el porqué y el cómo. Mostrar el drama humano, compartir la pena, la angustia de los miles de muertos, desaparecidos y torturados... El REMHI ha sido una puerta abierta para que las personas respiren y hablen en libertad, para la formación de comunidades con esperanza. Es posible la paz, una paz que nace de la verdad de cada uno y de todos.»

Después de la ceremonia, se celebró una recepción en el Palacio Arzobispal. Los invitados, unas seiscientas personas que habían hecho el trabajo de campo para el REMHI, pasaron a uno de los viejos patios de estilo colonial dentro del complejo de la catedral, para el refrigerio tradicional de café y tamales, así como para felicitar a monseñor Gerardi. Edgar Gutiérrez pronto notó que el obispo se había retirado al final de uno de los corredores que rodeaban el patio. Estaba de pie, bajo la sombra de uno de los arcos, y en silencio observaba a los invitados. Gutiérrez se acercó y le preguntó si se sentía agobiado por tanta gente. El obispo respondió distraído: «Nos hizo buena noche. Esperemos que no llueva.» Y luego preguntó: «Y tú, Edgar, ¿has hecho planes con tu familia para salir del país, para ir a estudiar a algún lugar mientras las aguas se calman?»

«¿No están calmadas, monseñor?», preguntó Gutiérrez.

«Bueno, van a estar más agitadas después de que terminen de leer el REMHI.»

«Entonces todavía tengo tiempo, monseñor», dijo Gutiérrez con un tono envalentonado.

Las últimas semanas y días de su vida, Gerardi advirtió en repetidas ocasiones a sus jóvenes auxiliares que tomaran precauciones. A Ronal Ochaeta le había urgido a que explorara la posibilidad de una beca para estudiar en una universidad europea o que buscara trabajo en una organización internacional. Pero Gerardi parecía menos preocupado por su propia seguridad. Guatemala, después de todo, se mantenía como un país fervientemente católico, a pesar de la oleada de conversiones al protestantismo evangélico, en especial durante las últimas décadas de la guerra. Gerardi probablemente suponía, como aparentemente lo hicieron todos a su alrededor, que su estatus como figura pública de la Iglesia católica lo protegería.

El domingo 26 de abril, el último día de la vida de Gerardi, empezó con normalidad. Margarita López, la cocinera y empleada durante más de veinte años de la casa parroquial, le sirvió su café de la mañana –fuerte, como a él le gustaba– en su habitación. El obispo Gerardi dormía en una cama sencilla con cabecera de madera. Había un crucifijo en la pared, sobre la cama, y sus prótesis dentales se encontraban en un vaso con agua sobre la mesita de noche. La habitación apenas estaba amueblada, tenía repisas para libros, un escritorio, un equipo de sonido y una televisión en la esquina. Monseñor Gerardi se puso su sotana, usó su anillo obispal e impartió la misa de las siete de la mañana. Después de ello, su sobrino Javier visitó a monseñor con sus hijos. El sacerdote auxiliar, el padre Mario, recordaría más tarde cuán absorto se veía el obispo mientras miraba a los hijos de Javier jugar Nintendo en su habitación. El padre Mario, quien entonces tenía treinta y cuatro años y había compartido las tareas parroquiales con Gerardi durante ocho años, fue de los primeros en notar la manera inusual en que se había vestido el obispo Gerardi ese día, con pantalones vaqueros y una camisa de cuadros roja en lugar de su camisa negra y su alzacuellos.

Alrededor de las once de la mañana, Ronalth Ochaeta llegó a la iglesia de San Sebastián para llevar a Gerardi a El Encinal, un residencial ubicado en una colina boscosa en las afueras de la ciudad, donde vivía el doctor Julio Penados, hermano del arzobispo, en cuya casa tuvo lugar la reunión para celebrar la presentación del REMHI.

En el camino se detuvieron en la casa de Ochaeta para llevar a su esposa e hijos, sus «nietos», como le gustaba llamarlos al obispo Gerardi. Ochaeta, un hombre pequeño,

con cara regordeta, parecido a un querubín mestizo, había trabajado para la ODHA cerca de diez años, y Gerardi, se decía a menudo, había llegado a quererlo como a un hijo. Ya de camino hacia la reunión, Gerardi contó emocionado sus impresiones sobre el evento del viernes en la noche, y dijo: «Ahora me puedo retirar en paz.» Jugaba con los hijos de Ochaeta, dándoles pedacitos de chocolate como premio si podían imitar las muecas divertidas que él iba haciendo.

Los invitados de esa celebración del domingo eran sobre todo colegas de la ODHA y familiares. Muchos recordarían después que «Monse» –así abreviaban monseñor– estaba de buen humor, animado, comentarían también cuán inusual les parecía que vistiera ropa informal. Usaba una chaqueta beige con los pantalones vaqueros. Una de las invitadas me dijo que Monse se veía como si de pronto se hubiera quitado diez años de encima. Hubo bromas, fiesta, bebidas, y luego tazones de garbanzos guisados y carne. El cielo estaba azul y brillante, el aire era fresco y fragante, olía a los pinos y eucaliptos que rodeaban la residencia.

Naturalmente, cuando las personas que estuvieron en esa reunión contaron lo que recordaban de esa tarde, enfatizaron detalles que, en retrospectiva, parecían cargados de premoniciones. Y es así como recordaron que, en cierto momento, Gerardi le dijo a Ronalth Ochaeta y Edgar Gutiérrez: «Ustedes dos no deberían andar tan juntos todo el tiempo. Después ellos van a decir que son *buecos*» –jerga guatemalteca para referirse a los homosexuales–. Todos rieron, pero cuando cesaron las risas, él insistió en que hablaba en serio. «Recuerden», les advirtió, «ahora es cuando van a empezar las campañas de difamación.»

También recordaron que el tema central de la conversación fue, por supuesto, el REMHI. «Ahora sabemos qué sucedió, pero no sabemos quién dio las órdenes», enfatizó

Gerardi en cierto momento. «Creo que necesitamos empezar a trabajar en otro pequeño proyecto», un nuevo informe sobre los «autores intelectuales» de las atrocidades cometidas durante la guerra. Soltó palabras así, al aire, dejó que las escucharan y luego siguió platicando. Gutiérrez respondió: «Ay, monseñor, si hacemos eso de seguro nos matan.»

Los invitados recuerdan que en ese momento el hijo menor de Gutiérrez se cayó de un columpio hecho con una llanta atada a la rama de un árbol y se rompió el labio, y que los otros niños gritaban: «¡Tiene sangre! ¡Tiene sangre!» Eran alrededor de las cuatro y media de la tarde y la fiesta, poco a poco, se apagó. La suegra de Gutiérrez, quien había venido de México para visitarlos, quedó tan perturbada por las advertencias de Gerardi que esa misma tarde decidió que sus nietos volvieran con ella a la ciudad de México.

Ronath Ochaeta, junto con su esposa y sus dos hijos, llevó a Gerardi de regreso a la iglesia de San Sebastián, ubicada en un barrio residencial de la zona 1. (La ciudad de Guatemala está demarcada por zonas numeradas, la mayoría compuesta de colonias o barrios, los cuales tienen, cada uno, su propio nombre.) San Sebastián queda a pocas cuadras hacia el norte de la Plaza Central, que está rodeada por la catedral y el renombrado Palacio Nacional de la Cultura —antes llamado Palacio Nacional—, sede de varios dictadores. Entre San Sebastián y el Palacio está ubicada la Casa Presidencial.

Llegaron a la iglesia entre las cinco y media y las seis menos cuarto. «¿No tiene que decir misa?», preguntó Ochaeta. El obispo dijo que el padre Mario diría la misa de las seis de la tarde. Hablaron brevemente sobre el viaje que Gerardi debía hacer el miércoles para asistir a una confe-

rencia en México. Ochaeta le aseguró que ya todo estaba arreglado. Gerardi se bajó del carro y volteó a verlos, les dijo adiós agitando la mano y luego entró a la casa parroquial.

Si el obispo Gerardi contemplaba realmente la idea de retirarse —a veces mencionaba la posibilidad, aunque casi todos creían que aún tenía demasiada energía y estaba muy involucrado en su trabajo, además de que era una figura demasiado importante para el arzobispo Penados y la Iglesia como para dejarlo todo— la conclusión de *Guatemala: Nunca Más* habría representado la culminación triunfante de más de cinco décadas de sacerdocio. Hijo de una familia de emigrantes y comerciantes italianos, Gerardi había pasado la mayor parte de sus primeros veinte años de sacerdocio sirviendo en parroquias pobres, en pueblos indígenas, rurales, hasta que fue llamado a la ciudad de Guatemala para trabajar sucesivamente con dos prelados poderosos y ultraconservadores —el arzobispo Mariano Rossell y el cardenal Mario Casariego— y sirvió además un turno como canciller de la curia. Su nombramiento como obispo de la diócesis de Verapaz (al norte del país) en 1967 coincidió con los años durante los cuales se celebró el Concilio Vaticano II (1965) y la Conferencia Episcopal Latinoamericana (1968), reuniones fundamentales que comprometieron a la Iglesia a una mayor apertura, y al clero —especialmente la última conferencia— a un rol más realista, receptivo a las necesidades de los pobres.

Lo que para algunos parecía una nueva teología radical —reformar la liturgia para hacerla más accesible, por ejemplo—, para el joven Gerardi parecían más bien aspectos prácticos. La diócesis de Verapaz estaba ubicada en

medio de montañas cubiertas de nubes, de bosques lluviosos, y ricas colinas con plantaciones de café. Durante mucho tiempo, a expensas de la población maya q'eqchi, esta diócesis había atendido las necesidades espirituales de una pequeña oligarquía, propietaria de los cafetales, descendientes, en su mayoría, de emigrantes alemanes que llegaron a Guatemala en el siglo XIX.

Durante siglos, en las raras ocasiones en que se impartían misas católicas en las comunidades aisladas, los q'eqchi, que en su mayoría ni siquiera hablaban español, tuvieron que escucharlas en latín. El obispo Gerardi fue pionero en la puesta en práctica de misas en idiomas mayas. Animó a sus sacerdotes a aprender q'eqchi y preparó y apoyó a catequistas y otros profesores laicos. «Nuestra Iglesia se halla frente al profundo reto de la realidad y situación en que viven nuestros indígenas», escribió Gerardi en 1973. «Efectivamente nos encontramos ante una situación de explotación, marginación, analfabetismo, enfermedades endémicas, pobreza e incluso miseria; todo ello equivale a un estado de injusticia y revela un estado de pecado. Esta situación, vista a la luz de nuestra fe, nos invita a volver al núcleo del mensaje cristiano, y crear dentro de nosotros una conciencia íntima de su verdadero significado y exigencias.»

Leyendo algunas de las cartas pastorales y otros escritos producidos por Gerardi durante esa época, quedé sorprendido por el equilibrio con que combinaba el sentido tradicional de la misión pastoral —buscando y predicando el misterio de la salvación en el ejemplo de Cristo— con un compromiso hacia los pobres. «El sufrimiento del cuerpo místico de Cristo es algo que nos debe hacer reflexionar. Es decir, si los pobres están fuera de nuestra vida, entonces tal vez Cristo está fuera de nuestras vidas.» La inclu-



El obispo Gerardi en El Quiché, c. 1975

sión de ese «tal vez» era una de sus características. Nunca alguien describió al obispo Gerardi como dogmático.

En 1980, cuando Gerardi era obispo de la diócesis de El Quiché, la zona indígena más poblada del país, escapó de un intento de asesinato. Estuvo a punto de convertirse en el segundo obispo asesinado en Centroamérica ese año. (En los cinco siglos precedentes sólo un obispo había sido asesinado en esa región.) Otro prelado, abierto e influyente, asociado con la teología de la liberación, el arzobispo Óscar Romero de El Salvador, había sido recientemente ultimado por un sicario vinculado a ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), el partido de ultraderecha gobernante en El Salvador.

El conflicto interno en Guatemala, que se desarrollaba con diferentes niveles de intensidad, cumplía entonces dieciocho años. La guerra había sido el resultado de un golpe



planificado por la CIA en 1954 contra Jacobo Arbenz Guzmán, el segundo presidente electo democráticamente en la historia guatemalteca. Arbenz había propuesto una reforma agraria para paliar las desigualdades del sistema que él mismo llamó «feudal» en su discurso de toma de posesión. Tierra ociosa, sin cultivar, en manos privadas, había sido expropiada y redistribuida entre campesinos sin bienes. Parte de esas tierras expropiadas pertenecían a un solo dueño, la United Fruit Company. El gobierno de Arbenz había reembolsado el valor a la United Fruit, pero a los desinflados precios que la compañía había declarado en el momento de valorarla para el pago de impuestos.

La United Fruit ejercía una considerable influencia en la administración Eisenhower a través de conexiones personales, particularmente a través de los hermanos Dulles, John Foster y Allen. Tal y como Stephen Schlesinger y Stephen Kinzer lo explican en *Bitter Fruit*, un relato del golpe de 1954 y sus repercusiones, John Foster Dulles, el secretario de Estado de Estados Unidos, había negociado un trato favorable del transporte por ferrocarril para la United Fruit en Guatemala mientras él era socio *senior* de la firma de abogados Sullivan y Cromwell en Nueva York. Allen Dulles, quien también había hecho trabajos legales para la United Fruit, era entonces el director de la CIA. No obstante, el motivo más importante que se hallaba detrás del golpe era que el gobierno de Estados Unidos temía al comunismo. Arbenz había legalizado el Partido Comunista en 1952 (en realidad era pequeño, con menos de mil miembros activos, la mayoría sin mucha influencia). Primero la administración Truman y luego la de Eisenhower malinterpretaron las intenciones políticas de las acciones del gobierno guatemalteco, rehusándose a reconocer que Arbenz, en esencia, era un nacionalista, sin vínculos proba-

dos con Moscú. Y de esa manera, en una operación similar a la de Irán, en la cual el primer ministro Mosaddeq fue depuesto, marchó el primer programa de cambio de régimen encubierto en Latinoamérica, que incluía fuertes acusaciones del establecimiento de una base militar soviética. Después de varios meses de sabotaje económico, maniobras y operaciones psicológicas, gestos amenazantes del ejército estadounidense, y la invasión de una pequeña fuerza rebelde, armada y entrenada por la CIA, Arbenz renunció y pidió asilo político en la embajada de México. El gobierno fue entregado a empresarios y líderes políticos de ultraderecha, quienes fundaron sus propios escuadrones de la muerte paramilitares, y también al ejército de Guatemala, respaldado por Estados Unidos. La política de reforma agraria de Arbenz fue revocada y muchos de sus defensores y beneficiarios fueron asesinados. El ejército de Guatemala al final se convertiría en la institución militar más brutal, corrupta y criminal del hemisferio occidental.

Cinco años después de que Arbenz fue removido de su cargo en América Latina, la Revolución Cubana inspiraba una nueva preocupación en la región. Después de una intentona de revuelta militar, liderada por oficiales *arbenzistas*, la administración Eisenhower decidió fortalecer las unidades de Inteligencia del ejército de Guatemala, engendrando un aparato clandestino criminal de terror sobre el cual, en el futuro, Estados Unidos perdería el control. En 1962, dos soldados jóvenes —el teniente Yon Sosa, de veintidós años y Luis Turcios Lima, de diecinueve, ambos con entrenamiento militar de élite en Estados Unidos— tomaron el interior del país para emprender la guerra de guerrillas contra lo que ellos describieron como la «tiranía y la humillación». El levantamiento tuvo, en principio, el apoyo del ahora desarticulado Partido Comunista de Guate-

mala, pero no por mucho tiempo. Aunque la causa de la revolución armada sobrevivió, las fuerzas guerrilleras en Guatemala, durante los años 60, no estuvieron integradas por más allá de unos cuantos cientos; no obstante una campaña contrainsurgente, financiada por Estados Unidos (era la «campaña-contra-el-terror»), asesinó durante esa década alrededor de diez mil civiles. Una paradoja particular y trágica de esa época es que mientras el programa Alianza para el Progreso, apoyado por el presidente John Kennedy, buscaba formas de identificar y apoyar a líderes reformistas, moderados y democráticos en Guatemala —incluso en los años 60— para llevarlos a estudiar a Estados Unidos, las fuerzas de seguridad y escuadrones de la muerte, respaldados por el gobierno de ese mismo país, asesinaban a esos líderes después de que regresaban a poner en práctica lo aprendido. Para 1970, dos tercios de las personas enviadas a estudiar a Estados Unidos habían sido asesinadas.

Mientras las posibilidades para un cambio pacífico se desvanecían ante una represión violenta, crecían las filas guerrilleras de corte marxista. La guerra interna de Guatemala, como los otros conflictos que le siguieron en Centroamérica (en El Salvador y Nicaragua, sobre todo), fue generalmente descrita en el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, y a las causas locales se les restaba importancia, pero esa guerra, de hecho y en esencia, se promovía para proteger a una élite atrincherada. A principios de la década de 1980, los oficiales de mayor rango del ejército de Guatemala se habían hecho extremadamente ricos. La mayoría de escuadrones de la muerte que operaban en Guatemala estaban vinculados al ejército, aunque sus actividades siempre se achacaban a extremistas de ultraderecha. O se apoyaba a la dictadura y a la oligarquía o se era calificado de izquierdista.

Uno de mis familiares en Guatemala, conservador en sus ideas políticas, médico, devoto del catolicismo, conocido por sus compromisos en el campo de la salud, no vinculado a la política, fue obligado junto a su familia a salir al exilio en 1970. Los doctores descalzos a quienes había entrenado para llevar tratamientos médicos básicos, como pastillas contra la disentería, a las áreas más alejadas y pobres, fueron asesinados uno a uno por el ejército, el cual había confiscado una pequeña clínica que él había construido con donaciones internacionales en el Triángulo Ixil, un pueblo de Nebaj, en una esquina montañosa en el norte de El Quiché.

El 31 de enero de 1980, El Quiché literalmente encendió la llama en la conciencia mundial cuando treinta y siete campesinos mayas ocuparon la embajada de España en Guatemala para llamar la atención y denunciar la violencia infligida en sus comunidades. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas bombardearon la embajada, provocando un infierno que mató a todos los insurgentes excepto a uno, así como a los miembros de la misión diplomática que quedaron atrapados en el edificio. Entre los muertos se encontraba el padre de quien se convertiría en el futuro en premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Esa noche el único sobreviviente, uno de los indígenas que protestaban, fue secuestrado del hospital donde convalecía y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue hallado la madrugada siguiente en la Universidad de San Carlos, la universidad pública nacional.

La masacre en la embajada de España precipitó una protesta de magnitud internacional y España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. Poco tiempo des-

pués, se lanzó una campaña de terror, que duraría años, contra la Iglesia católica y que pronto se extendió a las montañas brumosas, pueblos, villas y aldeas de El Quiché, la mayoría poblada por mayas. En una pequeña estación de radio comunitaria ubicada en la cabecera departamental, Santa Cruz, justo donde se encontraba la diócesis a cargo del obispo Gerardi, se descubrieron los cuerpos mutilados de dos catequistas de la Iglesia. Los conventos eran a menudo bombardeados con ametralladoras y granadas. Mientras la lucha contra la guerrilla se intensificaba en el altiplano, el ejército se apoderaba y ocupaba iglesias, casas parroquiales y conventos, para convertirlos en barricadas y centros de interrogatorios y tortura. Las estatuas de los santos fueron envueltas con ropa de camuflaje verde olivo, como para recordar a los feligreses a quién debían realmente obediencia, al menos si buscaban salvación terrenal. Al sacerdote español de la villa de Chajul, en el Triángulo Ixil, le tendieron una emboscada y fue asesinado. En Joyabaj, el padre Faustino Villanueva fue asesinado en su oficina. Algunas veces, cuando el ejército había desocupado una parroquia o un convento, la gente dejaba candelas encendidas afuera por las almas de aquellos que habían sido asesinados adentro.

En Nebaj, un pueblo antaño bullicioso, el ejército emplazó un nido de ametralladora en el campanario de la iglesia, apuntando hacia la plaza. Años después, en 1984, viajé en bus desde la ciudad de Guatemala a Nebaj junto con mi amiga Jean-Marie Simon, fotógrafa y periodista, además de investigadora tenaz para organizaciones de derechos humanos como Americas Watch y Amnistía Internacional. Visitamos una pequeña comunidad de monjas en

Nebaj que aún vivían en una casita conventual dentro del complejo colonial de la iglesia que el ejército había ocupado. Una de las monjas colocó una grabadora en la mesa y escuchamos sollozos y gritos de las sesiones de tortura que las monjas habían grabado a través de las paredes de adobe durante las noches. Para entonces, el ejército y los civiles, forzados a convertirse en milicias rurales —llamadas patrullas de autodefensa civil—, bajaban en camionadas a indígenas refugiados en las montañas, para llevarlos a vivir a campos desolados, en chozas hechas de pino con techos de zinc. Esos campos denominados «aldeas modelo» eran bautizados con nombres orwellianos como Nueva Vida. Acompañamos a las monjas al mercado del pueblo para comprar provisiones de comida, platos y vasos multicolores de plástico para los refugiados. Las monjas escogieron platos y vasos de todos colores menos verde: el color del Ejército, explicaron en voz baja. Era una protesta sutil, probablemente nadie la notaba, ni los refugiados ni el ejército, pero ¿quién se atrevería a arriesgarse más?

Durante años, los expertos en el conflicto armado guatemalteco han discutido qué parte de culpa de esa violencia recae en la guerrilla, en particular en la facción llamada Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Al moverse entre la población y prometerles una protección que no podían proporcionar, ¿empujaron al ejército a estas acciones? La guerrilla ciertamente carga con parte de la culpa. Pero el ejército de Guatemala también tenía su propia agenda, una agenda que, a principios de la década de los 80, cortó toda posibilidad de llegar a un acuerdo o negociación pacífica. La mentalidad estatal de seguridad nacional pronto relegó el altiplano indígena a área necesitada de la imposición de la marca de autoridad militar transformadora.

Mientras pudo, Gerardi trató de mantenerse a una distancia prudente del ejército y de la guerrilla. Pero en una ocasión, contada a menudo después de su asesinato, se enfrentó al comandante de la zona militar de El Quiché. El ejército, le reprochó al comandante, estaba matando más gente que la guerrilla. En su afán, Gerardi le advirtió que el propio ejército empujaba a la gente a los brazos de la guerrilla. La respuesta del militar fue solicitar la cooperación del obispo Gerardi, lo que implicaba, por ejemplo, que identificara a los colaboradores de la guerrilla en su parroquia. Él rehusó, el ejército empezó a considerarlo su enemigo. Demetrio Toj, un maestro y locutor de radio que fue secuestrado y torturado por el ejército, pero que logró fugarse de una manera espectacular y extraña, le contó a la ODHA que en cierto momento sus torturadores le preguntaron insistentemente «dónde escondía el obispo Gerardi las armas». Poco tiempo después del secuestro de Toj, el obispo fue advertido por los pobladores de San Antonio Ilotenango de que los soldados le preparaban una emboscada. Los propios aldeanos lo guiaron por una ruta alternativa a través de las montañas durante la noche, al amparo de la oscuridad.

Quizá después de escapar de la muerte en San Antonio Ilotenango, el obispo Gerardi perdió el control. «Cuando sientes la muerte llamando a tu puerta, te paralizas», le confió en una ocasión a Edgar Guriérrez. Gerardi decidió cerrar la diócesis de El Quiché, una decisión que lo persiguió durante mucho tiempo. No obstante fue un acto tanto de protesta como de miedo, quizás en el fondo con la intención de llamar la atención del cardenal Casariego, un prelado conservador y chapado a la antigua, que cultivaba sus relaciones con las familias adineradas y poderosas, además de bendecir con agua bendita los ranques del ejército.

El cardenal Casariego nunca habló sobre la represión, guardó silencio incluso sobre los asesinatos de sus propios sacerdotes. Su exacerbado anticomunismo lo convirtió, en apariencia, en un partidario acríptico del ejército.

La salida de los curas de El Quiché sólo profundizó la soledad de la provincia y no logró impedir la matanza, así que el obispo Gerardi y Próspero Penados, quien entonces era obispo de San Marcos, viajaron al Vaticano, donde, en reunión privada con Juan Pablo II, le informaron sobre la situación. El Papa se conmovió al escucharlos y escribió una carta pública a la Conferencia Episcopal de Guatemala condenando duramente la violencia contra la población civil y la persecución contra la Iglesia: «Comparto su dolor», escribió el Papa, «sobre la trágica acumulación de sufrimiento y muertes que pesa, y que no muestra signos de detenerse, sobre tantas familias y sobre sus comunidades eclesiales, debilitadas no sólo por el asesinato de varios catequistas, sino también de sacerdotes, en las más oscuras circunstancias, de manera vil y premeditada. Me siento particularmente entristecido por la grave situación de la diócesis de El Quiché, donde debido a las múltiples amenazas de muerte y hechos criminales contra el clero, la comunidad carece de asistencia religiosa.»

El cardenal Casariego debió sentir esa carta abierta como un reproche irritante. Los gobernantes y la élite conservadora estaban enfurecidos. ¿No era el papa Juan Pablo II acaso el símbolo de la resistencia anticomunista en el mundo? ¿Por qué respaldaba a los «comunistas» de El Quiché?

A pesar de que el obispo Gerardi solicitó un nuevo destino y permiso para no regresar a Guatemala, el Papa le ordenó reabrir la diócesis de El Quiché. El obispo Gerardi obedeció, pero en el aeropuerto de la ciudad de Guatema-

la fue recibido por un contingente militar que denegó su ingreso al país y le ordenó subir a un avión que lo llevó a El Salvador. El obispo Rodolfo Quezada Toruño, que había llegado al aeropuerto junto con otros delegados de la Iglesia para recibir a Gerardi, recordó años después —cuando ya había sido ordenado cardenal— que tuvo la impresión de que fue la presencia de ellos lo que evitó que los soldados se llevaran al obispo Gerardi a otro lugar y probablemente lo mataran.

En El Salvador, tan pronto como aterrizó, Napoleón Duarte, el presidente demócrata-cristiano, le advirtió al obispo Gerardi que había asesinos esperándole. Entonces partió hacia Costa Rica, donde permaneció durante tres años en un exilio angustiante. Tres meses después de la reapertura de la diócesis de El Quiché, el sacerdote a cargo fue asesinado. Y antes de que la guerra concluyera, sacerdotes, monjas, y trabajadores religiosos serían «martirizados» en El Quiché más que en cualquier otra diócesis de América.

En 1982, un golpe militar derrocó al general Lucas García como presidente de Guatemala y lo reemplazó el general Efraín Ríos Montt, un protestante evangélico que lanzó una despiadada campaña contrainsurgente de tierra arrasada. Se perpetraron cientos de masacres. Más de seiscientas villas y aldeas fueron quemadas, unas setenta mil personas fueron asesinadas, y tal vez alrededor de un millón de refugiados huyeron hacia las montañas y las fronteras del país. Para el obispo Gerardi, ésos fueron años de depresión y culpa por encontrarse tan lejos. También fueron años, según algunos, de soledad acompañada de bebida en exceso. Pero Ríos Montt fue depuesto en 1983 por el general Óscar Mejía Víctores, y un año después, cuando el cardenal Casariego murió, el Papa nombró a Próspero

Penados del Barrio arzobispo de Guatemala. Penados era una figura de unión dentro de una Iglesia gravemente dividida. Cambió la limusina y el chofer de su predecesor por un Toyota que él mismo conducía.

El general Ríos Montt había en varias ocasiones contrariado y desafiado abiertamente al papa Juan Pablo II. Por ejemplo, en la víspera de la primera visita del Papa a Guatemala en 1983, ignoró la petición de clemencia que el Papa hizo en favor de «subversivos» que fueron ejecutados después de un juicio sumario ante un tribunal militar cuyo sistema no admitía abogados defensores. En un gesto necesario hacia la Iglesia, el general Mejía Víctores permitió, de mala gana, que el arzobispo Penados llamara a su viejo amigo Gerardi al exilio.

La ODHA, establecida por el arzobispo Penados en 1989, y con el obispo Gerardi a la cabeza, se convirtió en la primera organización de derechos humanos a nivel local capaz de trabajar a escala nacional. Muchos guatemaltecos confiaban más en la Iglesia que en ninguna otra institución, aunque otros, claro, la despreciaban. En cualquier caso, la Iglesia era la única organización que podía superar las limitaciones culturales que enfrentaría la comisión de la verdad de Naciones Unidas establecida en los Acuerdos de Paz en 1996, y ésa fue la razón por la cual el obispo Gerardi concibió el proyecto REMHI. En la actualidad, los indígenas guatemaltecos hablan veintitrés idiomas mayas, y muchos de ellos no dominan el español. Muchas de las comunidades mayas se encontraban en zonas militares donde aún preveía un clima de represión tiempo después de concluida la lucha. Decenas de miles de mayas que habían abandonado sus hogares durante los años de terror, hu-

yendo hacia las remotas montañas y bosques, habían vivido durante años en comunidades semiclandestinas —«Comunidades de Población en Resistencia»— dentro del país, pero también en la frontera con México, así como en campos de refugiados. El obispo Gerardi comprendió que la mayoría de indígenas no iban a sentirse seguros y confiados al colaborar con los investigadores de Naciones Unidas, muchos de ellos extranjeros, a menos que la Iglesia católica ayudara primero a disipar esas profundas inhibiciones y miedos a hablar.

El informe REMHI —a pesar de sus imperfecciones como ciencia social estricta— era, hasta el momento, la investigación más extensa que se había emprendido sobre el número de víctimas de la guerra en la población civil. *Guatemala: Nunca Más* identificó con nombre y apellidos a una cuarta parte de los muertos civiles de la guerra (los 50.000 nombres comprenden el cuarto volumen) y documentó 410 masacres, que son definidas como intentos por destruir y asesinar comunidades completas. La mayoría de las masacres se llevaron a cabo entre 1981 y 1983, pero algunas tuvieron lugar más tarde, incluso en 1995. También se documentaron alrededor de mil quinientas muertes violentas de tres o más civiles al mismo tiempo. El informe compilaba cifras estimadas de refugiados de guerra, viudas y huérfanos, de víctimas de violación y tortura, y de desaparecidos. La investigación usaba el testimonio de víctimas, sobrevivientes y combatientes de ambos lados del conflicto, así como documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. El informe también incluía una evaluación de su propia metodología para recopilar información, mencionando las dificultades que representaban la poca fiabilidad de la memoria y el paso del tiempo. Analizaba los antecedentes históricos de la guerra, su impacto en las comunida-

des, sus estrategias y mecanismos. Un capítulo arroja luz sobre la más temida y misteriosa entidad estatal, la Inteligencia Militar, usualmente llamada G-2. (La terminología fue adoptada del sistema de clasificación del ejército de Estados Unidos: G-1, Personal; G-2, Inteligencia; G-3, Logística; etc.) El informe describía la estructura y funciones de varias de sus unidades, una de ellas dedicada al espionaje sexual (recolectaban información de esposos infieles o empleaban prostitutas-espías para comprometer a los oponentes). Cuando disponía de pruebas para hacerlo, *Guatemala: Nunca Más* identificaba a las unidades militares responsables de los crímenes, y en numerosos casos nombraba también individuos. El informe concluyó que el ejército de Guatemala y sus unidades paramilitares asociadas, como las patrullas de autodefensa civil, eran responsables del ochenta por ciento de los asesinatos de civiles, y que la guerrilla había cometido poco menos del cinco por ciento de los crímenes de guerra.

Los autores del informe REMHI intentaron describir e ilustrar la lógica de lo que ellos llamaron «lo inexplicable». Pero los números, análisis de tácticas y causas, e incluso las reconstrucciones periodísticas de masacres concretas resultaron fríos realmente para «explicar» todo. El obispo Gerardi, como le dijo una vez a Edgar Gutiérrez, quería un informe que «penetrara en los poros de los lectores» y que los conmoviera. Así, había cientos y cientos de páginas que transcribían los testimonios directos:

*La señora estaba embarazada. Con cuchillo le abrieron el vientre para sacarle el muchachito. Y mataron a los dos. Las niñas que jugaban en los arbolitos cerca de la casa, con machete cortaron sus cabecitas. Caso 0976, Santa María Tzejá, Quiché, 1980.*

Los mataron a machetazos, los mataron ahorcados y a balazos. Y a los niños los agarraron de los pies y les pegaron a un palo donde le pegaban a los niños se murió el palo, porque cuántas veces, por tantos niños que pegaron en ese palo, entonces pues se murió el palo. Caso 3336 Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz, 1982.

El 19 de marzo de 1981 llegó el Ejército a la aldea Chel, sacó de la iglesia a 95 personas que estaban haciendo oración, después se los llevaron al río que está a la orilla de la aldea y allí los masacraron con cuchillos y balas. Con ese hecho la gente se asustó y salió huyendo a la montaña donde también fueron perseguidos con helicópteros. Los responsables son el Ejército y las patrullas civiles. Caso 4761, Chel, Chajul, Quiché.

Cuando vi, estaban llamando a la gente que se reunieran todos y los estaban metiendo en una iglesia que está allá y yo me quedé escondido allí, viendo todo lo que estaba pasando, cuando vieron que ya no quedaba nadie afuera, hombres, mujeres, ancianos, niños, los metieron en la iglesia. Cuando vi, cerraron la puerta y luego comenzaron a regar gasolina por todos lados y luego le prendieron fuego. Ése es el testimonio que yo vine a decir. Caso 977, Santa María Tzejá, Quiché, 1982.

No sé si un capitán o un teniente que llegó allí con los soldados dijo: «Esta aldea va a terminar toda porque esta aldea está metida con la guerrilla.» A la una de la tarde terminaron de matar a toda la gente y sólo quedaron mujeres y niños. Entonces dijo el teniente: «Mejor matamos a todas las mujeres y los niños para que nadie quede.» A las mujeres y los niños los mataron con puras bombas, porque eran muchos los niños; como allí hay solteras buenas, entonces todos los soldados apartaron a todas las solteras. Hicieron como tres tandas y se pusie-

ron a matar a la pobre gente, pues como todos los soldados se quitaron el gusto con las más jóvenes, fue el teniente el que empezó a chingar a las pobres muchachas. Los niños de dos años se hicieron una bola así, se quemó toda la ropa pegada, se hizo una bola, los niños se quemaron todos. Caso 6070, Petanac, Huehuetenango, 1982.

Josefa (Acabal) estaba platicando con Eulalia (Hernández) cuando llegaron los soldados y rodearon la casa. Dejaron acuchillada a la señora, quedaron muertas, por todo eran cinco personas. Cuando los cadáveres ya estaban en el suelo comenzaron a quemar la casa, tiraron los cadáveres sobre el fuego. Caso 4912, Aldea Xix, Chajul, Quiché, 1983.

Corre afuera la manteca quemando, ve, como corre la manteca de las pobres mujeres. Parece como cuando estaba lloviendo que viene el agua en las zanjias. Como viene así la manteca pura agua. ¿Y qué es eso?, pensaba yo cuando entré, pura manteca está saliendo de las pobres mujeres, pura agua sale. Caso 6070, Petanac, Huehuetenango, 1982.

El lector podía salir de esas páginas preparado para creer al ejército de Guatemala culpable de cualquier crimen del que se le acusara. Y eso se convertiría más tarde en un problema para quienes tuvieron que investigar y seguir el juicio por el asesinato del obispo Gerardi. Tendrían que resistirse a llegar a conclusiones prejuiciosas y emocionales enraizadas en el salvajismo del pasado reciente.

En 1998, cuando se hizo público el informe REMHI, ningún oficial guatemalteco había sido encarcelado o procesado por un crimen relacionado con los derechos humanos, aunque algunos soldados y miembros de las milicias sí habían sido condenados. Algunos casos de impacto ha-

bían quedado estancados en los tribunales durante años, y la amnistía decretada en los Acuerdos de Paz pretendía evitar que avanzara cualquier caso de ese tipo. Pero bajo la ley internacional existían condiciones en las que esa amnistía podía ser parcialmente suspendida, y *Guatemala: Nunca Más*, como quedaría claro más tarde, iba a ayudar a que se alcanzaran esas condiciones. El obispo Gerardi había hecho saber que, si las circunstancias lo permitían, las pruebas recopiladas por el REMHI debían ser accesibles a la gente que más tarde buscara justicia contra los militares o la guerrilla.

Así que el informe REMHI introducía dinámicas impredecibles e imprevistas en la Guatemala de la posguerra. Inició un debate público que el ejército y sus aliados —¡responsables del ochenta por ciento de los crímenes de guerra!— no creían que tendrían que tolerar, ciertamente no *dentro* del país. Anticipándose al informe apoyado por Naciones Unidas y quebrando los tabúes de hablar en voz alta y repartir culpas, el REMHI desafió directamente esa amnistía y la posición incuestionable del ejército en la sociedad guatemalteca. Había mucho en juego para preservar esa posición. Tras la atribución de poderes que gozaba como protector de la oligarquía del país y como aliado de Estados Unidos en sus metas durante la guerra fría, el ejército se había convertido en un poder en sí mismo, su cuerpo de oficiales constituía una clase social de élite y protegía sus propios intereses.

Pero ¿cómo podría el asesinato del obispo Gerardi servir a esos intereses si el REMHI había sido ya publicado?